

LA REFORMA DEL ESTADO

David Ibarra
12 de febrero de 2004

Antes de sugerir acciones concretas, habría que precisar las principales líneas orientadoras de la Reforma del Estado mexicano. Hay múltiples necesidades que llevan a planteamientos razonables pero que acaso desvíen del verdadero camino a seguir. No hay duda, el país necesita remodelar casi todo, desde las políticas de relacionamiento externo, hasta las de seguridad social, o, desde la reelección de legisladores, hasta la incorporación de mecanismos como el veto presidencial y el plebiscito. Temas todos que podrían alimentar por mucho tiempo el debate nacional, sin que se destrabase el meollo de los obstáculos que vician la transición mexicana.

Los trastornos medulares nacen de haberse cambiado abruptamente los sistemas ordenadores de la vida social y habernos lanzado a una transición compleja, difícil, política y económica, interna y externa con avances, retrocesos y lagunas. De un sistema político de presidencialismo autoritario y de partido hegemónico se pasa a formar un régimen con multiplicidad de partidos políticos, alternancia, ausencia de control mayoritario en las cámaras. El sistema electoral ha ganado en transparencia y equidad. Pero, las elecciones dependen no de la movilización ciudadana en torno a demandas de carácter colectivo, sino de campañas a través de los grandes medios de comunicación que, privatizan, incorporan individualmente a los votantes.

El sistema económico se ha trastocado. Sin escalas, del nacionalismo protector, se abraza el cosmopolitismo de mercados abiertos con cesión acusada de la soberanía del país. Mucho se ha desregulado y casi todo se ha privatizado

para formar nuevos linderos entre Estado y empresariado. El mercado interno ha cedido el campo a la estrategia de competir y crecer hacia afuera.

La composición de los grupos sociales ganadores y perdedores ha sufrido enormes alteraciones, así como la distribución del poder político y del económico. Tiene lugar un intenso proceso de destrucción, obsolescencia y reconstrucción de instituciones que pone en jaque a toda la sociedad. Los organismos, las normas y las costumbres de antes dejan de funcionar o no funcionan bien, mientras las instituciones de reemplazo sólo cubran algunos ámbitos de la vida social, dejando huecos y distorsiones enormes por llenar o corregir.

Hasta ahora, el cambio se ha conducido como si política, economía y sociedad formasen compartimentos estanco, sin relación entre sí. Los trastornos inevitables del acomodo económico, se pensaron independientes de la modernización política. La falla en producir crecimiento e igualdad, genera costos, que supuestamente debiera, pero no absorbe, la alternancia en el poder.

En materia política se dan adelantos notables: voto libre y respetado, genuina competencia electoral, partidos políticos fortalecidos. Con todo, la democratización no se lleva al ámbito de las estrategias socioeconómicas por no contradecir los caminos exigentes de la globalización. El objetivo social básico se desplaza del empleo y el crecimiento a la búsqueda a ultranza de la estabilidad de precios. La intervención estatal en favor o defensa de los productores o de los grupos marginados del país, se desmantela. La creación de redes de seguridad apropiadas a la libertad de mercados –seguro de desempleo, salud universal--, se pospone, mientras se avanza en flexibilizar, precarizando las condiciones del trabajo y permitiendo la erosión casi sistemática de los salarios reales y del

empleo. La función de aglutinar voluntades y propósitos del viejo presidencialismo autoritario, no ha sido sustituido por fórmulas democráticas operantes.

La reforma del Estado junto a unir política y economía, debiera equilibrar los esfuerzos puestos en el acomodo externo con cuidados semejantes en suavizar el acomodo interno. Tanto empeño se ha puesto en vincularnos con el exterior que el país lleva dos décadas de estancamiento por descuido interno. Entonces, la parte medular de la reforma del Estado debiera dirigirse a erigir instituciones y mecanismos dirigidos a recuperar la capacidad de convenir acuerdos sociales fundamentales. Hay que democratizar todos los ámbitos de las decisiones gubernamentales, institucionalizar derechos sociales y económicos exigibles, integrarlos conforme a consensos entre ciudadanos, empresarios y trabajadores para luego llevarlos a las cámaras legislativas.

Son varios los requisitos a fin de progresar en el camino señalado. Primero superar el debate ideológico entre Estado y mercado. No se trata de tomar partido sobre la superioridad de uno sobre el otro, sino de reconocer que ambas son instituciones indispensables: una, para elevar eficiencia y competitividad; la otra, para asegurar los grandes equilibrios sociales, así como la armonización de las demandas ciudadanas con las de la apertura. Habría que poner coto al desmantelamiento del Estado que ya lo imposibilita a satisfacer las tareas aludidas.

Al propio tiempo habría que llevar a los partidos políticos a enriquecer sus propuestas hasta ofrecer soluciones susceptibles de confrontarse, ganar adeptos y rebasar los términos de estrategias socioeconómicas invariables cualquiera que sea el gobierno en turno.

En materia económica mucho habría que hacer para destrabar el desarrollo. La bonanza derivada de las transacciones comerciales internacionales no se gana con la simple apertura de fronteras o la firma de tratados de libre comercio. Se requiere de una política industrial y financiera de respaldo, llevada a la reconversión de buena parte de la planta productiva nacional, a la asimilación deliberada del progreso técnico, a la organización de los productores nacionales, a la elaboración de programas de elevación sistémica de la competitividad, a la inversión en infraestructura básica y en educación.

A su vez, las políticas estatales debieran enfocarse sistemáticamente a fortalecer el mercado interno, el empleo y la cura de las causas profundas de la marginación social. Ha llegado la hora de corregir desigualdades, democratizar, insisto, la política económica, en tanto eslabón faltante en la modernización del sistema político y vía de cancelar los males de una alternancia política carente de contenido.